



## Consejo Económico y Social

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1997/29/Add.1  
19 de febrero de 1997

ESPAÑOL  
Original: ARABE/INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
53º período de sesiones  
Tema 8 del programa provisional

### CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCION O PRISION

#### El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales

#### Informe del Secretario General

#### Adición

El presente documento contiene comentarios presentados por los Gobiernos de Chipre y Kuwait.

#### Chipre

[Original: inglés]  
[3 de enero de 1997]

1. Chipre no tiene problemas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales cometidos por sus autoridades o por ninguno de sus órganos estatales.
2. En Chipre no hay legislación especial relativa a la restitución, compensación y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se está estudiando la elaboración de legislación de ese tipo, teniendo en cuenta la legislación similar promulgada o propuesta en otros países. Para los casos aislados de violaciones hay un mecanismo jurídico para la restitución y compensación de las víctimas de conformidad con los artículos 35 y 172 de la Constitución de Chipre, conjuntamente con el capítulo 148 de la Ley de perjuicios civiles.

Se está estudiando la introducción de disposiciones legislativas suplementarias basadas en la legislación existente en países que son miembros del Consejo de Europa y en los convenios de ese Consejo.

3. Cabe mencionar que Chipre ha pasado a ser parte del Convenio europeo sobre la indemnización a las víctimas de crímenes violentos, y que antes de finalizar el año se presentará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley titulado "Indemnización a las víctimas de crímenes violentos". En virtud de esta ley, se pagará una indemnización a las víctimas de crímenes violentos que no puedan obtenerla de otras fuentes o de los culpables. Además, se está preparando la promulgación de una ley para ratificar el Convenio mencionado más arriba.

4. Se aprovecha la oportunidad para recordar al Secretario General, y por su conducto a la Comisión de Derechos Humanos, de las continuadas violaciones graves de los derechos humanos del pueblo de Chipre cometidos por las fuerzas turcas en la parte de Chipre ocupada por Turquía desde la invasión en 1974, y de la continuada ocupación del 37% de su territorio, violaciones por las que Turquía no ha proporcionado compensación efectiva a las víctimas.

Kuwait

[Original: árabe]

[6 de febrero de 1997]

1. La Constitución de Kuwait promulgada el 11 de noviembre de 1962

El párrafo 1 del artículo 18 de la Constitución estipula que la propiedad privada es inviolable. Ninguna persona será impedida de disponer de sus bienes, con excepción de lo dispuesto por la ley. Ningún bien será objeto de expropiación con excepción de los casos en que se trate de utilidad pública, en las circunstancias y de la forma prevista por la ley, y siempre que se pague una indemnización equitativa.

El artículo 25 de la Constitución estipula, además, que el Estado garantizará la solidaridad social respecto de las cargas resultantes de desastres y padecimientos de la población y pagará indemnización a las víctimas de daños de guerra y a toda persona que sufra lesiones en el cumplimiento de sus deberes militares.

En virtud del artículo 42 de la Constitución, ninguna persona será obligada a cumplir una labor forzosa, con excepción de las circunstancias previstas por la ley en caso de emergencia nacional y a cambio de una remuneración justa.

2. Decreto legislativo N° 21 de 1979, relativo a la defensa civil

Antes de examinar las disposiciones de los artículos que garantizan el derecho objeto del presente informe, se debe hacer referencia a la finalidad de la defensa civil, según se define en el artículo 1 del decreto legislativo mencionado más arriba, es decir, la necesidad de proteger a la población

civil y resguardar las comunicaciones, los edificios, las instalaciones, las instituciones públicas, la propiedad privada y las obras de arte y los tesoros arqueológicos del patrimonio nacional contra los peligros de los ataques aéreos y otros actos de guerra o sabotaje, de mitigar los efectos de esos actos si se producen y, en general, de garantizar que los servicios públicos continúen funcionando de manera regular en tiempos de guerra, de paz, de ley marcial y de emergencias o desastres públicos y de salvaguardar la seguridad nacional en estas circunstancias.

Aunque la finalidad es salvaguardar los derechos de los individuos en general, la legislación del Estado de Kuwait garantiza el derecho de los terratenientes a indemnización respecto de cualquier disminución del valor de sus propiedades debido a su requisación por orden del Consejo de Ministros. El derecho a compensación de los propietarios de bienes móviles requisados también está garantizado (artículo 8 del decreto legislativo arriba mencionado) y también se paga indemnización a las personas que sufren algún perjuicio como resultado de operaciones de defensa civil (art. 9).

3. Decreto legislativo N° 65 de 1980, relativo a la movilización pública

El Estado de Kuwait también garantiza este derecho en el caso de movilización pública proclamada por decreto, debido a tensiones en las relaciones internacionales, amenaza de guerra o brotes bélicos, en la forma prevista en el Decreto legislativo N° 65 de 1980 relativo a la movilización pública.

En virtud de los artículos 11, 13 y 14 del mencionado decreto, toda persona sometida a requisación obligatoria tiene derecho a una compensación que es determinada por comités de evaluación. Estas personas tienen derecho a protestar contra las decisiones de estos comités, y sus protestas se remiten a un grupo compuesto del presidente de un tribunal, un juez y un representante del órgano en cuyo beneficio se han requisado o utilizado los bienes.

En virtud de los términos del artículo 26 de ese decreto, los extranjeros o sus beneficiarios deben ser tratados de la misma forma que los nacionales de Kuwait respecto de su derecho a sueldo, remuneración o compensación si fallecen o sufren muerte o lesiones después de haber sido convocados, reclutados o asignados de conformidad con las disposiciones del decreto.

4. Decreto legislativo N° 67 de 1980, por el que se promulga el Código Civil

El Código Civil de Kuwait garantiza la indemnización respecto de actos ilícitos en general que causan perjuicios a otras personas (primera parte, vol. I, cap. 1, sec. iii), párrs. 227 a 261).

La definición de responsabilidad por actos ilícitos del Código es similar a las disposiciones de los códigos de otros Estados civilizados. Comienza con la definición de la responsabilidad por actos personales y llega hasta la definición de la responsabilidad de una persona, en ciertos casos específicos, por los actos de terceros y por los daños causados por cosas

incorpóreas. En todos estos casos, el Código impone el pago de una indemnización respecto de los daños resultantes de esos actos.

El Código estipula también que el Estado debe asumir la responsabilidad por los daños personales si resulta imposible identificar a las personas responsables del pago de la indemnización, en virtud de las disposiciones que rigen la responsabilidad por actos ilícitos, a menos que la imposibilidad de identificar a la persona responsable se atribuya a una falla de parte de la víctima o de uno de sus herederos (art. 256). Esta disposición está en consonancia con la ley islámica, que estipula que la Hacienda Pública asumirá la responsabilidad si se desconoce la persona responsable de restituir o de pagar una indemnización por fallecimiento u homicidio.

5. Ley N° 16 de 1960, por la que se promulga el Código Penal

Todos los actos que constituyen violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales están tipificados como delitos en el Código Penal de Kuwait, el cual prescribe penas apropiadas para sus perpetradores. Entre estos actos figuran:

a) Secuestro, detención y trata de blancas

El artículo 178 del Código estipula que todo aquel que secuestre a una persona sin su consentimiento, obligándola a trasladarse del lugar en que reside normalmente a otro lugar, y la detuviese en el mismo, será punible con pena de prisión de hasta 7 años. Si el secuestro se efectúa con empleo de fuerza, amenazas o engaño, la pena podrá ser de hasta 10 años de prisión. Si la víctima es débil mental, demente o menor de 21 años de edad, la pena podrá llegar hasta los 15 años de prisión.

En virtud del artículo 179, todo aquel que secuestre a una persona demente, débil mental o menor de 21 años de edad sin utilizar la fuerza, las amenazas o el engaño, será punible con una pena de prisión de hasta 10 años. Si la finalidad del secuestro es matar, herir, violar o someter a asaltos indecentes a la víctima, forzar a la víctima a someterse a la prostitución u obtener algo de la víctima o de otras personas por extorsión, la pena será de prisión perpetua. Ahora bien, si el secuestrador es la madre de la víctima, ésta no será punible si demuestra sus buenas intenciones y está convencida de que tiene el derecho a la custodia del niño.

En virtud del artículo 180, todo aquel que secuestre a una persona mediante el uso de la fuerza, las amenazas o el engaño con intención de matarla, hierla, violarla, someterla a asaltos indecentes u obligarla a prostituirse, u obtener algo de dicha persona o de otros por extorsión, será punible con la pena de muerte.

En virtud del artículo 181, todo aquel que ocultase a una persona secuestrada, sabiendo que dicha persona ha sido secuestrada, será punible como si hubiera sido el autor del secuestro. Si también tuviese conocimiento de la finalidad con que se secuestró a dicha persona, o de las circunstancias

en que se produjo el secuestro, será punible con la misma pena que el secuestrador que actuó con tal finalidad o en esas circunstancias.

En virtud del artículo 183, todo aquel que secuestrase, ocultase o intercambiase a un recién nacido o falsificase sus documentos de progeñie, será punible con una pena de prisión de hasta diez años.

En virtud del artículo 184, todo aquel que raptase, encarcelase o detuviese a una persona en circunstancias distintas de las previstas por la ley, o sin tener debidamente en cuenta los procedimientos prescritos por la ley, será punible con una pena de prisión de hasta tres años y/o una multa de hasta 3.000 rupias. Si estos actos van acompañados de tortura física o amenaza de muerte, la pena será de hasta siete años de prisión, a lo que podrá agregarse una multa de hasta 7.000 rupias.

En virtud del artículo 185, todo aquel que introdujese o extrajese de Kuwait a una persona con miras a disponer de ella como esclava, y todo aquel que comprase, ofreciese en venta o entregase a una persona como esclava, será punible con una pena de prisión de hasta cinco años y/o una multa de hasta 5.000 rupias.

b) La violación y las relaciones sexuales ilícitas

El artículo 186 del Código Penal de Kuwait mencionado más arriba estipula que todo aquel que tuviese relaciones sexuales con una mujer sin su consentimiento, mediante el uso de la fuerza, las amenazas o el engaño, será punible con la pena de muerte o de prisión perpetua. Si el delincuente fuera un ascendiente de la víctima, o si fuera una de las personas a las que se ha confiado su crianza o bienestar, o a la que se hubiera conferido autoridad sobre ella, o si fuera su sirviente o un sirviente de cualquiera de las personas mencionadas más arriba, el delincuente será punible con la pena de muerte.

El artículo 187 estipula, además, que todo aquel que tuviera una relación sexual con una mujer sin utilizar la fuerza, las amenazas o el engaño pero sabiendo que ésta es demente, débil mental, menor de 15 años o incapaz de ejercer su libre albedrío por cualquier razón, o sabiendo que ésta no tiene conciencia de la naturaleza o de la ilegalidad del acto al que está sometida, será punible con una pena de prisión perpetua.

En virtud del artículo 191, todo aquel que utilizase la fuerza, las amenazas o el engaño para cometer un asalto indecente será punible con una pena de prisión de hasta 15 años. Si el delincuente es un ascendiente de la víctima o si es una de las personas a quienes se ha confiado la crianza o el bienestar de la víctima, o a la que se ha conferido autoridad sobre la víctima, o si es un sirviente de la víctima o de alguna de las personas mencionadas más arriba, el delincuente será punible con una pena de prisión perpetua.

En virtud del artículo 192, todo aquel que asaltase en forma indecente a un muchacho o muchacha menores de 21 años de edad sin utilizar la fuerza, las

amenazas o el engaño, será punible con una pena de prisión de hasta diez años. Si el delincuente es un ascendiente de la víctima o si es una de las personas a quienes se ha confiado la crianza o el bienestar de la víctima, o a la que se ha conferido autoridad sobre la víctima, o si es un sirviente de la víctima o de alguna de las personas mencionadas más arriba, la pena será de hasta 15 años de prisión.

c) Adulterio

El artículo 195 del Código Penal estipula que toda persona casada, ya sea de sexo masculino o femenino, que voluntariamente tuviese relaciones sexuales con una persona distinta de su cónyuge y fuera descubierta en flagrante delito, será punible con una pena de prisión de hasta cinco años y/o una multa de hasta 5.000 rupias.

El artículo 196 estipula, además, que si la persona que tuvo la relación sexual con el cónyuge adúltero sabía, o podía haber sabido, que la persona con la que estaba cometiendo adulterio era casada, dicha persona será punible con una pena de prisión de hasta tres años y/o una multa de 3.000 rupias.

d) Incitación a la perversión y la prostitución

El artículo 200 del Código Penal estipula que todo aquel que incitara a una persona del sexo masculino o femenino a cometer actos de perversión o prostitución, o que de cualquier manera facilitara la comisión de esos actos, será punible con una pena de prisión de hasta un año y/o una multa de hasta 1.000 rupias. Si la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de hasta dos años de prisión y/o multa de hasta 2.000 rupias.

El artículo 201 estipula, además, que todo aquel que utilizase coerción, amenazas o engaño para inducir a una persona del sexo masculino o femenino a realizar actos de perversión o prostitución será punible con una pena de prisión de hasta cinco años y/o multa de hasta 5.000 rupias. Si la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de hasta siete años de prisión y/o multa de hasta 7.000 rupias.

e) Falta de respeto a la religión

El artículo 109 del Código Penal arriba mencionado estipula que todo aquel que, con pleno conocimiento del significado de sus actos, destruyese, dañase o profanase locales destinados a observancias religiosas, o cometiese en ellos actos contrarios al respeto debido a la religión de que se trate, será punible con una pena de prisión de hasta un año y/o multa de hasta 1.000 rupias. La misma pena se aplicará a todo aquel que perturbase una reunión lícita de observancia religiosa con el objeto de perturbar dicha reunión o expresar falta de respeto, o a quien asaltase ilegalmente a cualquier persona que asistiese a dicha reunión.

El artículo 111 estipula, además, que todo aquel que, de alguna de las formas especificadas en el artículo 101, propagase públicamente opiniones que impliquen falta de respeto, burla o desprecio por una religión o confesión

religiosa con la intención de desacreditar sus creencias, observancias, ritos o enseñanzas, será punible con una pena de prisión de hasta un año y/o multa de hasta 1.000 rupias.

Con arreglo al artículo 113, todo aquel que publicase un libro que se considera sagrado en la fe de una religión, y deliberadamente distorsionase su contenido para cambiar su significado con miras a desprestigiar dicha religión, será punible con una pena de prisión de hasta un año y/o multa de hasta 1.000 rupias.

-----